

RIESGOS GLOBALES

La paz, la democracia y los derechos están viéndose cada vez más amenazados en el contexto de una economía mundial en crisis. Las condiciones en muchos países se han deteriorado desde el Congreso de la CSI en Berlín, y el impacto del desempleo, la pobreza y la inseguridad económica como factores instigadores de conflicto resulta cada vez más aparente. Unos niveles históricos de desempleo, desigualdad y pobreza constituyen un terreno fértil para el reclutamiento de bandas criminales y causas fundamentalistas. Los ataques contra la libertad sindical y el diálogo social, el cierre del espacio democrático en numerosos países, los efectos devastadores del virus del Ébola y la peor crisis de refugiados registrada desde la Segunda Guerra Mundial contribuyen de manera particular a la escalada de riesgos globales.

Los sentimientos nacionalistas y sectarios se están propagando, con el extremismo y la intolerancia pasando a un primer plano en muchos entornos políticos nacionales.

En alrededor de 40 países están teniendo lugar conflictos armados de diversa intensidad, y el número de grupos armados sigue aumentando. Los conflictos se han intensificado en la región de OMNA, con el surgimiento de grupos yihadistas como el Estado Islámico, insurgencia e inestabilidad en el Norte de África y un estado de permanente tensión entre Israel y Palestina, donde el gobierno israelí bloquea cualquier intento de progreso para lograr la paz y un acuerdo justo. La situación en la frontera entre Rusia y Ucrania corre el riesgo de desembocar en una nueva Guerra Fría, con pocas o ninguna señal de que las negociaciones puedan resolver la crisis en un futuro inmediato. En Asia y el Pacífico, las tensiones geopolíticas están en aumento, y continúan los movimientos insurgentes en varios países. Los conflictos internos y/o la insurgencia yihadista resultan prominentes en muchos países africanos, y el crimen organizado violento, en algunos casos en complicidad con el gobierno, está costando miles de vidas en algunos países de América Latina. En prácticamente todos estos casos, mujeres y niños resultan desproporcionadamente afectados, incluso mediante la esclavitud y la trata de personas.

En algunos casos donde la paz ha conseguido ser negociada y la democracia conquistada, corren ahora peligro. Las amenazas y las agresiones físicas contra la UGTT en Túnez pretenden socavar su papel central e histórico a la hora de situar al país en una nueva vía, mientras que el acuerdo de paz en Irlanda del Norte corre el riesgo de dar marcha atrás, desembocando en sectarismo alimentado por los drásticos recortes en el gasto público vital.

También están surgiendo nuevos factores generadores de guerras, con las enormes riquezas de Arabia Saudita y Qatar en particular destinándose a sufragar guerras 'por poderes' en Siria e Iraq y a apoyar la insurgencia en numerosos países. Existen de momento unos 40 grupos armados en Iraq y 60 en Siria, con distintos grados de fuerza y filiación cambiante. Millones de personas se han visto desplazados en la región, y la CSI, la ITF y la CES informarán sobre una misión conjunta enviada a Turquía, una de las últimas fronteras para cientos de miles de refugiados que huyen del conflicto.

La capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz se está viendo superada, y la timidez de la ONU combinada con la desvinculación por parte de numerosos países de su papel con vistas a la protección de la paz y la seguridad, está dejando a muchos millones de personas sin la protección vital o la esperanza de que prevalecerá la paz.

Un factor clave en la escalada de conflictos armados es la continua reducción del papel del gobierno, conforme las empresas privadas y el sector financiero van asumiendo cada vez mayor control sobre la toma de decisiones, a expensas de la democracia. Han conseguido frenar la reforma del sistema financiero mundial, encontrar gobiernos sumisos dispuestos a proporcionar refugios fiscales y a imponer un modelo de comercio internacional que garantice que, cuando los intereses de las empresas colisionen con el interés público, sean las empresas las que salgan ganando. La Encuesta Global de la CSI revela que el 78 por ciento de la población considera hoy en día que su economía nacional únicamente sirve a los ricos, mientras que el 84 por ciento piensa que los ciudadanos no tienen suficiente influencia sobre la toma de decisiones económicas. El modelo dominante de comercio internacional está expandiendo unas cadenas de suministro que empobrecen a los trabajadores y trabajadoras, al promover un continuo traslado de los salarios a los beneficios empresariales y que degradan la toma de decisiones democráticas sujetando a los gobiernos a injustificables procedimientos privados de solución de controversias entre inversor y Estado. Esto es algo que contrasta de manera patente con el modelo deseable de comercio que incremente la interdependencia, comparta la riqueza y reduzca posibles conflictos.

Los gobiernos, cada vez más comprometidos con los intereses de las empresas, a menudo carecen del coraje necesario para actuar a fin de mitigar y revertir los riesgos globales. El auténtico papel del gobierno, que es regular y proporcionar servicios en interés de la población y encontrar soluciones a los desafíos nacionales y mundiales, debe ser restaurado.

No obstante, la demanda popular de libertad de expresión y derechos democráticos, ahí donde están ausentes o se ven amenazados, sigue siendo intensa. El pueblo de Hong Kong, apoyado por la central sindical HKCTU, ha venido mostrando su determinación por defender la democracia y otros ejemplos de movilización popular reclamando derechos, muchas veces con los sindicatos en primera línea, están floreciendo por todo el mundo.

La historia reciente demuestra que los gobiernos pueden trabajar juntos para hacer frente a cuestiones de interés global. Tras seis años de complejas negociaciones en torno a toda una serie de temas contenciosos, el Tratado de la ONU sobre el comercio de armas entrará en vigor apenas una semana después de celebrarse esta reunión del Consejo General. Firmado por 122 países y ratificado ya por 54 países este tratado, aunque no es perfecto, pretende al menos por fin garantizar una mayor transparencia y cierta regulación del comercio internacional de armas. Los gobiernos todavía siguen pudiendo hacer frente al reto, pero a menudo sólo lo hacen cuando la presión pública no les deja otra alternativa posible.

Riesgos ya familiares a la seguridad mundial, y otros nuevos peligros emergentes, pondrán a prueba el debilitado papel de los gobiernos y las instituciones globales.

La amenaza de una nueva proliferación nuclear y la hipótesis catastrófica de que Corea del Norte presione el interruptor nuclear constituye un temor constante para la población en la región y en el resto del mundo. Mantener el mortífero arsenal nuclear mundial cuesta alrededor de 100.000 millones USD al año, dinero que podría reinvertirse en cubrir necesidades humanas esenciales al igual que gran parte de los 1,7 billones USD destinados a fines militares cada año a nivel mundial. La industria armamentista continúa haciendo enormes beneficios, con más de 100 empresas que registran ventas superiores a los 700 millones USD al año, sin contar China, y la mayor de ellas comercializa decenas de miles de millones de dólares en armamento cada año.

La devastación inminente ocasionada por el cambio climático, si no se mitiga, supone un peligro real y presente, visto que las catástrofes meteorológicas continúan multiplicándose y la competencia por las tierras, el agua potable y otros recursos vitales se intensifica con el aumento del nivel del mar.

La escalada de ciber-conflictos es otro asunto que plantea riesgos significativos emergentes. Los gobiernos y sus representantes han venido desplegando ciber-tecnología contra otros países en toda una serie de conflictos en curso, y en muchos casos contra levantamientos populares reclamando democracia y derechos. Detrás de estos casos está el espectro de una guerra cibernética a gran escala, algo integrado ya en los planes militares de muchos

países. Esto implica trastornos y la paralización de infraestructura crítica, que podrían causar un daño indescriptible a la población civil. Muchos observadores consideran que se trata de una cuestión de cuándo, no de si, se desatará esa tecnología destructora.

Los riesgos globales se multiplican, y el sistema internacional no tiene de momento todas las respuestas. Muchos países tampoco tienen la resistencia necesaria para hacer frente a estos retos cuando se materializan. La epidemia del ébola constituye un ejemplo claro de los efectos de décadas de fracaso en las políticas de desarrollo y la gobernanza. Pese a las advertencias urgentes lanzadas por MSF y otros, la lenta respuesta de la comunidad internacional ha costado miles de vidas antes de que la epidemia pudiese considerarse bajo control.

Frente a este trasfondo, el papel unificador del movimiento sindical, sus credenciales democráticas y su compromiso con la paz y la democracia resultan más cruciales que nunca antes. Hacer campaña en defensa de los derechos sindicales y contra los ataques al diálogo social es un acto de democracia y de paz en sí mismo. La defensa del pleno empleo y del trabajo decente constituye un elemento esencial para garantizar la justicia social y la estabilidad y para eliminar las desigualdades y la privación económica, principales factores desencadenantes de conflictos. El diálogo social que ha de fundamentar la transición hacia una economía baja en carbono es un ejemplo más del papel esencial que tienen los sindicatos para hacer frente a las crisis globales cuando, de dejarse sin respuesta, amenazan el tejido mismo de las sociedades.

El movimiento sindical ha de responder además a los desafíos de la naturaleza cambiante del mundo del trabajo. Con el creciente dominio de los intereses empresariales sobre la política gubernamental, los avances tecnológicos, tanto en cuanto a las aplicaciones técnicas como al enorme incremento en el acceso a la tecnología, corren el riesgo de ser utilizados para aumentar las desigualdades y la inseguridad. Sin embargo no es algo inevitable, y el movimiento sindical debe estar preparado para moldear el futuro del trabajo de tal manera que beneficie a las personas en lugar de revertir simplemente en ganancias netas para la empresa. Reinvertir en pleno empleo y trabajo decente, e implementar la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social, deben constituir elementos centrales de este esfuerzo.

Recomendaciones:

El Consejo General,

- Reafirma el compromiso de la CSI al desarme nuclear mundial, y su campaña de acción a favor del Tratado de No Proliferación Nuclear. Insta a todas las afiliadas y Organizaciones Regionales a promover la petición que será presentada a la ONU durante la Conferencia de Revisión del TNP en 2015;
- Exhorta a todos los gobiernos a apoyar a la OMS desplegando recursos para controlar y superar la epidemia del ébola y otros desafíos sanitarios mundiales;
- Compromete a la CSI a facilitar foros multinacionales sobre riesgos emergentes en 2015, empezando por Belarús, para elevar nuestra voz colectiva reclamando libertad sindical y democracia, con una cumbre global que tendrá lugar en 2016;
- Aprueba la coordinación en 2015 de un importante informe, con contribuciones de las afiliadas, Organizaciones Regionales y otros asociados, que evalúe los riesgos globales contra la solidez de la libertad sindical y otros derechos democráticos; y
- Confirma que la CSI apoya la Iniciativa relativa al futuro del trabajo, con ocasión del centenario de la OIT, y emprenderá consultas con las afiliadas y las FSI en 2015 con vistas a presentar una propuesta de intervención estratégica en las deliberaciones de la OIT en el período previo a 2019.